

Nicaragua: de paraíso seguro a terror estatal

Carmen Herrera Vallejos

Periodista nicaragüense que investiga temas de violencia estatal

Palabras clave:

Nicaragua, violencia, levantamiento popular de abril.

La violencia social y política de Nicaragua se ocultaba como el polvo fino debajo de una alfombra: estaba ahí, pero no se veía. En los medios de comunicación oficiales, la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa del presidente sandinista, Daniel Ortega —que ya alcanza los 12 años en el poder—, repetía con orgullo cada día: “Somos el país más seguro de Latinoamérica”. Para los nicaragüenses, la frase sonaba a farsa en un país que mostraba poco a poco síntomas de violencia cada vez más crueles.

La frase la acuñó oficialmente el Legislativo desde 2014, cuando el Institute for Economics and Peace (IEP) publicó que Nicaragua fue el sexto país más seguro de América Latina y el Caribe, según su índice de paz de ese año.

En la última década, el paraíso de la seguridad pública nicaragüense se fue construyendo bajo la sombra de que el país apenas contaba con siete homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales de 2017. Además, su política de seguridad —una sutil mano de hierro— maravillaba y convencía al gran capital y a otros sectores de poder de que era el mejor modelo de desarrollo en una nación empobrecida que en los últimos años estaba creciendo a un ritmo del 4 % anual, el más alto de la región.

Pero la ficción de un país seguro dio paso a la verdad después de los sucesos del levantamiento popular de abril de 2018,

que causaron, en tres meses, más de 325 muertos, más de 700 presos políticos, miles de heridos, una cifra aún no calculada de desaparecidos y un país ocupado por la policía, producto de la represión sanguinaria desatada por el Gobierno.

Nueve meses después del levantamiento popular, un estudio de CID Gallup da cuenta de que el 22 % de los hogares de Nicaragua registra una víctima de robo, porcentaje que está por encima de El Salvador (20 %) y de Guatemala (18 %) en peligrosidad, “dos naciones que antes aparecían como las más peligrosas por el actuar de las maras y el crimen organizado”. Estos datos aparecen en la investigación sobre violencia en Centroamérica, República Dominicana y Perú que llevó a cabo esa misma empresa en enero de 2019.

Lo que no se observaba o no se quería ver era cómo, de manera velada y sistemática, cada vez más los órganos de seguridad pública —desde inicios del Gobierno sandinista a la cabeza de Daniel Ortega en 2007— se fueron multiplicando y fortaleciendo, principalmente, a la vista de los sectores del poder económico.

Estos dieron la espalda a una población que desde 2007 denunció el acoso, el control y la violencia social que ejercía el brazo político de la juventud del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Juventud Sandinista, en las universidades, escuelas e institutos del país. Asimismo, denunciaron a los diversos grupos de control barrial mediante los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), controlados desde el Ejecutivo, que hacían lo mismo en las comunidades: espiar y fiscalizar a los “opositores al Gobierno del pueblo presidente”, que quería “la restitución de derechos de los más

pobres” con el Gobierno “socialista, cristiano y solidario”.

El esquema de fortalecimiento de los grupos de “seguridad pública” se estrenó con los grupos de choque de la Juventud Sandinista durante el fraude electoral de las elecciones municipales de 2008. La población salió en masa a las calles a exigir el respeto a su voto, que había sido robado por el Estado de Nicaragua, ya cooptado en menos de un año por el recién electo Gobierno sandinista. La protesta callejera fue sofocada por las violentas fuerzas civiles de choque que eran custodiadas por la Policía Nacional.

“Eso ha sido el sandinismo: un partido de criminales. Han convertido en criminales a muchos jóvenes, incrementando la criminalidad en otros; les han desviado sus vidas”, reflexiona un exmiembro del Ministerio de Gobernación de la década de los ochenta durante la Revolución y cuyo nombre se omite por razones de seguridad.

Mientras se fortalecían las fuerzas de choque de civiles, la Policía Nacional se declaraba pública y descaradamente como “sandinista”, apellido que ostentó cuando se creó (luego del triunfo de la Revolución sandinista en 1979). Ese mote fue cambiado durante la transición democrática de los años noventa, después de la derrota del FSLN, y fue sustituido por Policía “Nacional”, con un rango constitucional al servicio de toda la población, no de un partido.

De este modo, el sandinismo aseguró, desde el inicio del segundo mandato, en 2007 (el primero fue de 1979 a 1980, con la Revolución), un modelo de seguridad que respondía a “cuidar al presidente, su Gobierno y a sus seguidores”. Esta “seguridad” aparente en las ciudades no era más que un control ejercido en tres partes: en las

calles, la Policía; en los barrios, los vigilantes CPC; y en las escuelas y universidades, los grupos de choque de la Juventud Sandinista.

En el campo, además de la Policía, el Ejército de Nicaragua también dizque garantizaba la seguridad mediante los batallones ecológicos, los batallones de seguridad de la cosecha cafetalera, entre otros. Se escucha bien, pero, en la práctica, fueron denunciados por las víctimas en los medios de comunicación. Se los acusó de ejercer violencia política y de desaparecer a opositores campesinos y a sus familiares que habían pertenecido a la ex Resistencia Nicaragüense, que era un grupo armado que combatió la Revolución sandinista con apoyo logístico y dinero del Gobierno de Estados Unidos. Este grupo se nutría de campesinos que fueron el blanco del sandinismo por oponerse a sus políticas coercitivas en nombre de la “Revolución” de los años ochenta.

Es decir, el plan de “seguridad pública” era una maravilla: la base sandinista, que se organizaba y entrenaba para golpear a los oponentes en sus territorios; la Policía, que cuidaba al presidente y al núcleo de poder del sandinismo y sus intereses económicos; y el Ejército, que, calladamente junto con la Policía, eliminaba en el campo la “delincuencia” y mantenía la seguridad nacional por el bien del país. Ahí está “el país más seguro de Centroamérica”, que también fue elevado al rango de país más seguro “de Latinoamérica”. Era todo un engranaje que imitaba el complejo sistema de la Dirección General de Seguridad del Estado de los años ochenta, que se justificaba para cuidar y sostener la “Revolución sandinista” de aquella época.

“Lo que hacen los sandinistas es muy acorde a lo que ellos predicaban sobre la centralización del Estado y acorde con el

pensamiento marxista. La separación del poder de Montesquieu no va de acuerdo con su naturaleza, porque, para el sandinismo, el poder es uno. De ahí que en ningún país socialista existe separación ni autonomía de poderes, porque el poder es uno, pues el propósito es mantener dominado al pueblo”, explica un escritor y exfuncionario gubernamental.

La “seguridad” que surge desde el Estado resulta en cualquier país un instrumento institucional más. Nicaragua, al igual que otros países que han vivido la experiencia de una revolución de izquierda, se ha caracterizado por el montaje de un engranaje de inteligencia complejo que cuida los “intereses de la Revolución”. Mucho se ha escrito sobre estos órganos depredadores de la vida privada de las personas que habitan en sociedades con experiencias de regímenes autoritarios en los que todos sospechan de todos, y la Nicaragua de los ochenta no fue la excepción en la creación de este tipo de instancias de seguridad. La sombra de la “seguridad del Estado” revivió con el ascenso del sandinismo en 2007.

Recientemente fue comprobada de manera oficial la resurrección de ese sistema olvidado durante los años de democracia que experimentó el país desde 1990 hasta 2006. En un video filtrado de una reunión partidaria en el occidental departamento de León, Ana Isabel Morales, exministra de Gobernación y conocida ex guerrillera sandinista, afirmaba que, en la actual lucha contra el “golpe de Estado” —así llamado por el régimen al levantamiento cívico—, era acompañada por “la inteligencia del Ejército y la Policía”. Esta aseveración daba legalidad a la denuncia pública de que órganos estatales de seguridad acuerpaban al Ejecutivo en su política de exterminio.

Sin embargo, a pesar del supuesto control, a simple vista todo iba bien... hasta que llegó abril. El país parecía estar en su mejor momento: tenía seguridad pública y crecimiento macroeconómico, toda protesta era sofocada en fracciones de segundos y todo volvía a la “normalidad”. Analistas intelectuales, periodistas de opinión y críticos opositores de pasarela criticaban “la pasividad del pueblo” ante el autoritarismo sandinista.

En 2009, en una reunión de líderes de organizaciones de la sociedad civil, una reconocida feminista llamó “estómagos con patas” a quienes, asustados por el control estatal, se mostraron pasivos ante la ola de represión desatada por el recién electo Gobierno. Para no desaparecer, decidieron enfocarse en proyectos sociales “ecológicos o educativos”, que era lo que les permitía el Gobierno de la “segunda parte de la revolución”. Nada de trabajo de incidencia política ciudadana. De esta forma lograron sobrevivir algunas organizaciones locales hasta la fecha.

No obstante, después de 12 años y de tres elecciones fraudulentas, los jóvenes y la sociedad en general se cansaron de ver la corrupción y el abuso de poder en todos los niveles de parte del sandinismo gubernamental. Por ello, con piedras, tiradoras y bombas caseras, se lanzaron en masa a retar al afamado engranaje de seguridad que el sandinismo había tejido maquiavélicamente durante más de una década. Fue un involuible y violento levantamiento popular estudiantil que inició el 18 de abril de 2018 y que controló el país durante tres meses.

El susto de los dueños de la seguridad fue inmediato. La Policía, con armas de guerra, se lanzó sin piedad ante aquella masa de gente que decía basta y que empezó a organizarse rápidamente para crear bloqueos en universidades, en calles de ciudades y en comuni-

dades rurales. Su objetivo era impedir el paso a la avalancha de matones civiles y policías armados que se les tiraban cobardemente con armas para aniquilarlos en una guerra sin precedentes en la que la mayoría de los contrincantes estaba desarmada y una minoría armada asestaba golpes sobre la población.

El 18 de julio de 2018, tres meses después de la resistencia, la denominada “Operación Limpieza”, librada por el Gobierno, terminó con el levantamiento masivo cívico, que provocó un país sitiado y ocupado por paramilitares y policías en las ciudades y un ejército invasivo en el campo. Aunque los resultados fueron dolorosos, después de 40 años de poder del FSLN como Gobierno y mayoría opositora, fue esta generación la que quitó el velo de la seguridad pública que el sandinismo se ufana de ejercer sobre el país.

“Llegué a pensar en algún momento que solo el sandinismo podría dar esta seguridad al país, pues creía que el asesinato, en tiempos de paz de los líderes de la ex Contra, era una necesidad para tener la tranquilidad que teníamos, pues consideraba que la realidad sería otra si no se hubiera aniquilado a los ‘malos’ de la Contra”, expresó en su momento un artista plástico que nunca se consideró sandinista.

Todas las generaciones de las últimas décadas se acostumbraron a la “seguridad” que proveía el sandinismo desde el Ejército y la Policía, incluso aquellos que se consideraban contrarios a este grupo. En silencio, se agradecía que su sistema brindara seguridad en las ciudades ante los ladrones, las pandillas y el crimen organizado.

Sin embargo, en los últimos años, la gente empezó a denunciar cada vez más la barbarie que ejercía la Policía Nacional, que ya estaba

en franco deterioro, pues había institucionalizado que su deber era cuidar “al presidente” y a sus seguidores, así como reprimir y dejar en el abandono al resto de la población.

Antes del levantamiento de abril, un periodista afirmó: “La Policía es la única que va a poder botar al régimen de Ortega”, en clara alusión a las múltiples denuncias de abuso de poder que aparecían en los medios de comunicación y que nadie atendía.

En las áreas urbanas se fue creando la ilusión de la seguridad, pero fue la actual generación de jóvenes la que reveló la verdadera careta de falsedad del sandinismo. Los jóvenes, sin miedo, le quitaron el velo al rostro de la violencia institucional que llevaba más de 10 años en el poder. “Esta juventud los ha desnudado”, expresó un docente de una universidad del interior del país.

El sentido clasista de los encargados de la seguridad

Si bien no es nada nuevo que en un sistema de violencia sea siempre la gente pobre la que pone los muertos, en el caso de Nicaragua, el FSLN, que surgió en los años sesenta como un movimiento político de izquierda integrado por estudiantes universitarios e intelectuales de clase media, se nutrió de campesinos pobres y obreros de la ciudad. Estos fueron entrenados en la ideología socialista por el FSLN, y si bien durante la lucha armada —que duró 18 años (1961-1979)— murieron algunos de sus dirigentes de clase media, no fue así a la hora de tomar el poder para hacer la revolución de los años ochenta.

Durante la Revolución, el ejército de la Guardia Nacional fue reemplazado por el nuevo Ejército Sandinista, nutrido por miles de personas pobres del campo y de la ciudad y dirigido por exguerrilleros letrados. Se puede

deducir que siempre es así: las personas con instrucción toman responsabilidades dirigentes que la gente iletrada no podría sobrellevar, y eso fue claro en el marxismo: quien no sirve para la revolución, sirve para la guerra.

En los 10 años que duró la Revolución sandinista por la guerra que libró, supuestamente, no hubo tiempo de equiparar o de dar oportunidad a los más pobres de estudiar y competir por cuotas de poder más dirigentes. La nueva nomenclatura revolucionaria tuvo que recibir entrenamiento ideológico en Cuba y en la antigua Unión Soviética para “estudiar” las necesidades de la clase explotada. No obstante, como lo que se aprendió fuera de la realidad no cambió la condición de clase de la dirigencia, los pobres tuvieron que morir en la guerra civil de un bando y del otro.

Treinta años después de aquella revolución fallida, nuevamente los pobres se defienden de la represión instalada durante esta segunda fase del Gobierno de Ortega, que, a pesar de no haber una guerra declarada como en los ochenta, se ha sostenido por la instalación de un modelo de seguridad de esa época, y se repite la historia de quienes fueron víctimas del conflicto durante el levantamiento cívico del campo y de la ciudad.

“Desgraciadamente, los muertos los pone la gente humilde, la gente pobre. Lo vemos en todo: en las marchas, en los tranques [barricadas], pero en todas las situaciones ahí no ves, aunque sean personas que están en contra del Gobierno, no ves a las personas que tienen sus negocios, a la gente que tiene sus fincas grandes, a la gente que tiene ya una situación cómoda económicamente. No les gusta exponerse ni exponer a su familia, principalmente. Entonces, la gente que te va a agarrar un fusil siempre es el estudiante pobre, el obrero, el campesino. A veces muere la gente humilde, pero siempre después hay

arreglos en las cúpulas, y sale perjudicada su familia”, opina un funcionario de una localidad ubicada al norte del país que es gobernada por la oposición al sandinismo.

De ahí que, en la actualidad, el plan de seguridad del sandinismo está en manos de gente de sectores populares que mata a su misma clase —los creados “paramilitares”— durante la protesta nacional. En su mayoría, se trata de hombres de 50 años que participaron en el servicio militar de los años ochenta y que fueron marginados por el sistema durante más de tres décadas. La dirigencia de la “inteligencia” estatal del partido de Gobierno recurrió a ellos ante la falta de policías para reprimir al pueblo, con el cuento de que había que defender la “segunda parte de la Revolución”.

“Los paramilitares son personas que habían sido marginadas, olvidadas, gente que nunca fue capacitada, que nunca fue atendida, [personas a las] que siempre mantuvieron al margen y ahora les dan un rifle. Les dan un papel importante y ellos creen que están combatiendo de nuevo y que están defendiendo la revolución, porque son bien crédulos. Muchos de ellos vienen de ahí. Es gente que, después de tanto tiempo, no se ha integrado totalmente a la vida civil”, reflexiona un exmilitar retirado del Ejército de Nicaragua.

El sistema de seguridad montado por el sandinismo es un hueso duro de roer: logró aplastar el levantamiento armado y ha permanecido en el poder después de 10 meses del conflicto cívico; ha recibido múltiples amenazas de la comunidad internacional; ha sido marginado diplomáticamente; Estados Unidos presiona por su salida pacífica; no cuenta con fondos para sostenerse, ya que dependía de alguna manera del petróleo venezolano; la gran mayoría de la inversión

extranjera se ha retirado. Estas y otras calamidades han hundido la supuesta “bonanza económica” del país “más seguro de la región”. Sin embargo, su sistema de seguridad se mantiene intacto debido al apoyo incondicional del Ejército, de la Policía y de los paramilitares.

“Si se arma de nuevo, yo tengo que ir. Yo estuve en la UNAN [una de las masacres más crueles escenificada por cuerpos de seguridad armados con fusiles de guerra que combatieron en la universidad estatal a jóvenes atrincherados y sin armas]. Dieciséis horas estuvimos ahí, y después fuimos a la iglesia Misericordia [iglesia que todavía tiene miles de agujeros que fueron provocados por las ráfagas de los fusiles estatales]. A nosotros nos dirigían extranjeros cubanos y venezolanos. A mí me reclutaron porque yo era chofer y escolta de la Alcaldía de Managua, y además era de los CPC de mi barrio. A varios de nosotros nos mataron otros de nosotros mismos. El pueblo no nos mató”, contó un paramilitar cuyo nombre se omite.

A la fecha, la ciudadanía considera que su seguridad es cosa del pasado. Managua, la capital, es una ciudad ocupada militarmente con una vida que concluye a las siete de la noche. Después de esa hora, solo los más atrevidos salen a las calles de una ciudad que se preciaba de tener los índices más bajos de violencia hasta antes de abril, cuando no había tantos civiles armados con patente de corso para matar o robar.

La Policía circula todo el día y toda la noche por la ciudad convertida en cementerio nocturno. Las denuncias de robo, de violencia intrafamiliar y de otros delitos comunes no son atendidas, ya que la policía solo se preocupa por la seguridad del presidente y está preparada para reprimir el mínimo gesto de

rebelión de una población que no para de luchar contra sus opresores.

Recientemente, a mediados de febrero, en nombre del “mes del amor y la amistad”, el Gobierno sacó de la cárcel a 1,172 presos comunes que habían sido sentenciados por asesinato, robo o violación. Se trató de un acto sin precedentes en un país con más de 600 presos políticos, pues cerca de 60 fueron liberados a finales de febrero. El resto quedó a merced y capricho del régimen en una suerte de rehenes juzgados sin causa comprobada, solo por ejercer su derecho constitucional a la protesta cívica.

“Hoy es el primer sábado que de nuevo viviremos violencia. Varios delincuentes de mi cuadra fueron liberados, y el sábado todo el mundo se tiene que encerrar porque salen a beber licor y luego a fregar a la gente. Desde que fueron encarcelados en los planes de seguridad que tenía antes la Policía, mi barrio estaba en paz. Ahora volvemos a vivir con miedo”, expresó con preocupación y tristeza Javier Lumbí, habitante de un barrio del sector occidental de Managua.

De todas maneras, lo peor está por venir. Si la lucha de la mayoría logra que la pareja presidencial dimita, la inseguridad quedará en manos de miles de matones armados, de expresidarios, de agentes de la seguridad del Estado y de militantes fanáticos de un partido otrora “revolucionario”. Todos han demostrado ser capaces de los peores actos de violencia por la defensa de una ilusión socialista. Esto quedó demostrado cuando fueron capaces de denunciar y atacar durante el levantamiento cívico a sus mismos hermanos de partido opositor al régimen.

“Tengo un vecino que es uno de los presos comunes liberados por el Gobierno. Lleva casi toda su vida en la cárcel, pero

durante las protestas lo sacaron para ir a reprimirlas. Lo sacaron para ir a limpiar los tranques, a él y a varios presos. La sorpresa fue que él es parte de los 1,172 liberados por la vicepresidenta. Eso me preocupa, porque este vecino es capaz de cualquier cosa. Tengo miedo de qué planes asquerosos tenga la Rosario Murillo con estos delincuentes. Si les dio la libertad es porque los va a usar para algo”, expresó una habitante de uno de los barrios orientales de Managua que presentan altos índices de violencia.